

OMAR JAVIER ARCINIEGAS VELASQUEZ
Abogado Universidad de Nariño

Santiago de Cali, 30 de abril de 2026 SEÑOR
JUEZ CONSTITUCIONAL (Reparto)
E.S.D

REF: MEMORIAL PODER

Yo, **LUIS ALBERTO VELÁSQUEZ CUARAN**, persona mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía No. 18.129.584 expedida en Mocoa (Putumayo), con domicilio y residencia en la carrera 6 No. 9 - 664, del barrio Miraflores del municipio de Mocoa, correo electrónico: gerenciahjj@gmail.com, obrando en nombre propio, por medio del presente escrito:

MANIFIESTO

Que confiero **PODER ESPECIAL, AMPLIO Y SUFICIENTE** al abogado **OMAR JAVIER ARCINIEGAS VELÁSQUEZ**, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía No. 98.379.267 expedida en Pasto (N) y portador de la Tarjeta Profesional No. 188.193 del C. S. de la J, para que en mi nombre y representación adelante las siguientes actuaciones:

I. OBJETO DEL PODER

Para que interponga y tramite **ACCIÓN DE TUTELA** contra la **SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES**, por la vulneración de mis derechos fundamentales al debido proceso, derecho de petición y acceso a la administración de justicia, dentro del asunto relacionado con el proceso de insolvencia identificado con expediente No. 2026-03-002880.

II. FACULTADES

El apoderado queda facultado para:

1. Presentar, corregir, adicionar y reformar la acción de tutela.
2. Solicitar medidas provisionales.
3. Interponer recursos que sean procedentes.
4. Aportar, solicitar y controvertir pruebas.
5. Recibir notificaciones.
6. Sustituir total o parcialmente el presente poder.
7. Desistir, transigir y conciliar cuando lo estime conveniente.
8. Adelantar todas las actuaciones necesarias para la defensa de mis derechos fundamentales.


III. ALCANCE

El presente poder se otorga con todas las facultades inherentes al mandato judicial, sin limitación alguna, conforme a lo previsto en el Código General del Proceso.

IV. VIGENCIA

El presente poder estará vigente durante todo el trámite de la acción de tutela y sus eventuales impugnaciones o actuaciones derivadas.

De Usted señor (a) Juez,


LUIS ALBERTO VELÁSQUEZ CUARÁN
C.C. No. 18.129.584 expedida en Mocoa (Putumayo).


Acepto,



OMAR JAVIER ARCINIEGAS VELÁSQUEZ
C. de C. No. 98.379.267 expedida en Pasto (N)
T. P. No. 188.193 de Pasto (N)
E-mail: firmaxios@gmail.com

DILIGENCIA DE PRESENTACIÓN PERSONAL Y RECONOCIMIENTO DE FIRMA Y HUELLA

Mocoa, 19 MAY 2026
Ante el Notario Único del Circuito de Mocoa, compareció quien dijo llamarse Luis Alberto Velásquez Cuaran
exhibió la C.C. No. 18129584 de Mocoa
y declaró que la firma y huella que aparecen en el presente documento son suyas y el contenido es cierto


FIRMA Y HUELLA DEL DECLARANTE
Notar esta diligencia notarial
Se realiza a solicitud expresa
del interesado (a)





OMAR JAVIER ARCINIEGAS VELASQUEZ

Abogado Especializado
Universidad de Nariño

Santiago de Cali, 27 de mayo de 2026

SEÑOR
JUEZ CONSTITUCIONAL (REPARTO)
E. S. D.

REF: ACCIÓN DE TUTELA – PROTECCIÓN DE DERECHOS
FUNDAMENTALES

ACCIONANTE: LUIS ALBERTO VELÁSQUEZ CUARÁN

ACCIONADA: SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES – REGIONAL ZONA
SUR

I. COMPARECENCIA

Yo, **OMAR JAVIER ARCINIEGAS VELÁSQUEZ**, mayor de edad, identificado como aparece al pie de mi firma, abogado en ejercicio portador de la Tarjeta Profesional No. 188.193 del Consejo Superior de la Judicatura, actuando en calidad de apoderado judicial del señor **LUIS ALBERTO VELÁSQUEZ CUARÁN**, conforme al poder adjunto, respetuosamente interpongo **ACCIÓN DE TUTELA** contra la **SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES – REGIONAL ZONA SUR**, por la vulneración de los derechos fundamentales de mi representado.

II. ACCIONADA

SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES – REGIONAL ZONA SUR.

III. DERECHOS FUNDAMENTALES VULNERADOS

- Derecho fundamental de petición
- Debido proceso
- Acceso a la administración de justicia
- Derecho de defensa y contradicción

IV. HECHOS

1. Mi poderdante fue admitido por la Superintendencia de Sociedades dentro de un proceso de reorganización empresarial mediante Auto No. 2024-03-001452 de fecha 11 de marzo de 2024, conforme a la Ley 1116 de 2006, dentro del expediente interno No. 2026-03-002880.
2. Posteriormente, mediante Auto No. 2024-03-004894 del 18 de julio de 2024, fue designado como promotor el auxiliar de la justicia **CARLOS HUMBERTO PAVA SIERRA**, identificado con cédula de ciudadanía No. 2.631.558.
3. Dentro de sus funciones legales, el promotor debía estructurar el acuerdo de reorganización y presentarlo oportunamente ante el juez del concurso dentro del término legal previsto en el artículo 31 de la Ley 1116 de 2006.
4. No obstante, el promotor incumplió con dicha obligación, toda vez que no presentó el acuerdo de reorganización dentro del término legal de cuatro meses previstos en el inciso 5 del artículo 31 de la Ley 1116 de 2006, disposición que establece:

“(…) En la providencia de reconocimiento de créditos se señalará el plazo de cuatro meses para celebrar el acuerdo de reorganización, sin perjuicio de que las partes puedan celebrarlo en un término inferior. El término de cuatro meses no podrá prorrogarse en ningún caso.

Dentro del plazo indicado para celebrar el acuerdo, el promotor con fundamento en el plan de reorganización de la empresa y el flujo de caja elaborado para atender el pago de las obligaciones, deberá presentar ante el juez del concurso, según sea el caso, un acuerdo de reorganización debidamente aprobado por el voto favorable de un número plural de acreedores que representen, por lo menos, la mayoría absoluta de los votos admitidos. (…)”

5. Ante dicha situación, mi representado presentó derecho de petición ante la Superintendencia de Sociedades el día 15 de enero de 2026, debidamente radicado, mediante el cual puso en conocimiento el incumplimiento del promotor y solicitó la adopción de medidas tendientes a garantizar la continuidad del trámite, incluyendo la posibilidad de designar un nuevo promotor y evaluar la ampliación de términos procesales.

6. Pese al tiempo transcurrido, la entidad accionada omitió emitir respuesta de fondo, clara, precisa y congruente respecto de la solicitud presentada.

7. Sin resolver previamente dicha petición, la **SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES** profirió el Auto No. 2026-03-002402 del 11 de marzo de 2026, mediante el cual dio por fracasado el proceso de reorganización y ordenó la apertura de la liquidación.

8. La decisión adoptada desconoció que la causa principal del incumplimiento procesal ***obedeció a la omisión del promotor designado por la propia entidad y no a una conducta atribuible al deudor.***

9. La entidad accionada omitió valorar oportunamente la solicitud presentada por el accionante y adoptó una decisión definitiva sin resolver previamente un asunto que tenía incidencia directa en el sentido de la actuación administrativa.

10. Como consecuencia de lo anterior, mi representado quedó expuesto a un proceso de liquidación judicial con afectación directa de su patrimonio, actividad económica y posibilidad real de recuperación empresarial.

V. PROCEDENCIA EXCEPCIONAL DE LA ACCIÓN DE TUTELA

La presente acción resulta procedente de manera excepcional, toda vez que la vulneración alegada no se origina exclusivamente en el contenido del Auto No. 2026-03-002402, sino en la omisión previa de la entidad accionada de resolver un derecho de petición cuya respuesta tenía incidencia directa y determinante en la decisión posteriormente adoptada.

La Corte Constitucional ha sostenido que la acción de tutela procede excepcionalmente contra actuaciones administrativas cuando la decisión cuestionada es consecuencia de una vulneración previa de derechos fundamentales, particularmente del derecho de petición y del debido proceso.

En el presente asunto, la omisión administrativa privó al accionante de obtener una respuesta oportuna frente a una situación que comprometía seriamente la viabilidad del proceso de reorganización.

Así mismo, los mecanismos ordinarios no resultan eficaces ni idóneos para evitar la consumación del perjuicio irremediable que actualmente enfrenta el accionante, dado que el proceso ya se encuentra encaminado hacia la liquidación judicial, circunstancia que puede tornar inocua cualquier decisión posterior.

VI. FUNDAMENTOS DE DERECHO Y JURISPRUDENCIA

1. DERECHO DE PETICIÓN

La Corte Constitucional ha reiterado que el derecho de petición exige una respuesta material, de fondo, clara y congruente con lo solicitado.

En Sentencia T-377 de 2016, la Corte señaló:

“El derecho de petición se vulnera cuando la autoridad no emite una respuesta de fondo, clara, precisa y congruente con lo solicitado.”

Igualmente, la Sentencia SU-067 de 2022 reiteró:

“La respuesta debe resolver materialmente lo pedido; no basta una actuación formal o evasiva.”

En el presente caso, la entidad accionada omitió resolver de fondo la solicitud elevada por el accionante antes de adoptar una decisión definitiva dentro del proceso concursal.

2. INCIDENCIA DEL DERECHO DE PETICIÓN EN LA DECISIÓN ADMINISTRATIVA

La Corte Constitucional ha indicado que cuando una solicitud tiene la capacidad de influir en el sentido de una decisión administrativa, la autoridad está obligada a resolverla previamente.

En Sentencia T-230 de 2020 se indicó:

“Cuando la solicitud elevada por el administrado tiene la potencialidad de incidir en el sentido de la decisión administrativa, la autoridad está obligada a resolverla previamente.”

En el caso concreto, la petición presentada buscaba precisamente que la entidad evaluara medidas para superar el incumplimiento del promotor y preservar el trámite de reorganización.

3. DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO

La jurisprudencia constitucional ha sostenido que el debido proceso administrativo exige que las decisiones se adopten valorando integralmente los elementos relevantes obrantes dentro de la actuación.

En Sentencia T-442 de 2017, la Corte señaló:

“Se vulnera el debido proceso cuando la administración adopta decisiones sin considerar elementos relevantes que obran en el expediente.”

La entidad accionada omitió valorar una circunstancia determinante: el incumplimiento del promotor y la solicitud formulada por el accionante para corregir dicha situación.

4. PRINCIPIO DE BUENA FE Y CONFIANZA LEGÍTIMA

El accionante actuó diligentemente al poner en conocimiento de la entidad la situación presentada con el promotor designado por la propia administración.

En consecuencia, resulta desproporcionado trasladar íntegramente al deudor las consecuencias derivadas de actuaciones u omisiones atribuibles al auxiliar de la justicia designado dentro del trámite.

VII. PERJUICIO IRREMEDIABLE

La continuidad de los efectos del Auto No. 2026-03-002402 expone al accionante a un perjuicio irremediable, dado que:

- Se frustra definitivamente la finalidad del proceso de reorganización empresarial.
- Se pone en riesgo el patrimonio y la actividad económica del accionante.
- El proceso avanza hacia una etapa de liquidación potencialmente irreversible.
- La demora en la intervención constitucional puede tornar ineficaz la protección solicitada.

VIII. PRETENSIONES

1. Amparar los derechos fundamentales invocados.
2. Dejar sin efectos el Auto No. 2026-03-002402 del 11 de marzo de 2026, proferido por la Superintendencia de Sociedades.
3. Ordenar a la entidad accionada resolver de fondo el derecho de petición presentado por el accionante el día 15 de enero de 2026.
4. Ordenar a la Superintendencia de Sociedades adoptar una nueva decisión respetando plenamente las garantías del debido proceso.
5. Vincular al presente trámite constitucional al auxiliar de la justicia **CARLOS HUMBERTO PAVA SIERRA**, en calidad de promotor designado dentro del proceso de reorganización.

IX. MEDIDA PROVISIONAL

Con fundamento en el artículo 7 del Decreto 2591 de 1991, solicito decretar como medida provisional la suspensión inmediata de los efectos del Auto No. 2026-03-002402 del 11 de marzo de 2026, mientras se resuelve de fondo la presente acción constitucional.

La medida resulta necesaria para evitar la consolidación de un perjuicio irremediable y preservar la eficacia material del eventual fallo de tutela.

X. PRUEBAS

DOCUMENTALES:

OMAR JAVIER ARCINIEGAS VELASQUEZ

Abogado Especializado
Universidad de Nariño

APORTADAS:

1. Derecho de petición de fecha 15 de enero de 2026.
2. Constancia de radicación del derecho de petición.
3. Auto No. 2026-03-002402 del 11 de marzo de 2026.
4. Poder otorgado al suscrito apoderado.

SOLICITADA:

Solcito, Señor Juez (a) se sirva, oficiar a la Superintendencia de Sociedades – Regional Zona Sur para que con destino a la presente acción se envíe copia íntegra del Expediente No. **2026-03-002880**, objeto de tutela.

XI. JURAMENTO

Bajo la gravedad de juramento manifiesto que no he interpuesto otra acción de tutela por los mismos hechos, derechos y pretensiones aquí invocados.

XII. NOTIFICACIONES

ACCIONADA: Superintendencia de Sociedades – Regional Zona Sur, Calle 10 No. 4 – 40 Piso 2 Oficina 201, Edificio Bolsa de Occidente, Santiago de Cali. Correo electrónico: pmercantiles@supersociedades.gov.co o comailto:pmercantiles@supersociedades.gov.co.

ACCIONANTE: Calle 3 No. 1 A – 74 Piso 2 Barrio El Jordán, Jamundí (Valle del Cauca). Correo electrónico: firmaxios@gmail.com

Sírvase, Señor Juez (a) proceder de conformidad.

Atentamente,



OMAR JAVIER ARCINIEGAS VELÁSQUEZ
C.C. No. 98.379.267 de Pasto
T.P. No. 188.193 del C.S. de la J.
E-mail: firmaxios@gmail.com

Santiago de Cali, 27 de mayo de 2026

**SEÑOR
JUEZ CONSTITUCIONAL (REPARTO)
E. S. D.**

REF: SOLICITUD DE MEDIDA PROVISIONAL
ACCIONANTE: LUIS ALBERTO VELÁSQUEZ CUARÁN
ACCIONADA: SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES – REGIONAL ZONA SUR

Con fundamento en el artículo 7 del Decreto 2591 de 1991, respetuosamente solicito decretar **MEDIDA PROVISIONAL** consistente en la suspensión inmediata de los efectos del Auto No. 2026-03-002402 del 11 de marzo de 2026, proferido por la Superintendencia de Sociedades, así como la suspensión de cualquier actuación derivada de dicho acto administrativo mientras se resuelve de fondo la presente acción de tutela.

I. FUNDAMENTOS DE LA SOLICITUD

La medida provisional resulta necesaria y urgente debido a que el proceso de reorganización empresarial del accionante ya fue dado por terminado y actualmente avanza hacia una etapa de liquidación judicial.

La continuidad de dichas actuaciones puede tornar irreversible la situación jurídica del accionante y hacer ineficaz una eventual decisión favorable dentro del trámite constitucional.

II. APARIENCIA DE BUEN DERECHO

De manera preliminar se evidencia una posible vulneración de derechos fundamentales, toda vez que:

- El accionante presentó derecho de petición el día 15 de enero de 2026.
- La solicitud tenía incidencia directa dentro del trámite concursal.
- La entidad accionada no emitió respuesta de fondo.
- Posteriormente profirió decisión definitiva mediante Auto No. 2026-03-002402 del 11 de marzo de 2026.

Lo anterior plantea una posible afectación de los derechos fundamentales de petición y debido proceso.

III. PELIGRO EN LA DEMORA

La medida resulta urgente porque:

- El trámite concursal continúa avanzando hacia la liquidación judicial.
- Pueden adoptarse decisiones adicionales sobre bienes y patrimonio del accionante.
- La intervención tardía del juez constitucional podría tornar inocua la protección solicitada.

IV. NECESIDAD DE LA MEDIDA

OMAR JAVIER ARCINIEGAS VELASQUEZ

Abogado Especializado
Universidad de Nariño

La suspensión provisional solicitada:

- No genera un perjuicio desproporcionado para la administración.
- Preserva la finalidad del trámite constitucional.
- Garantiza la eficacia material de una eventual decisión de amparo.

V. SOLICITUD

Por lo expuesto, respetuosamente solicito:

1. Suspender provisionalmente los efectos del Auto No. 2026-03-002402 del 11 de marzo de 2026.
2. Ordenar la suspensión temporal de las actuaciones derivadas del referido auto mientras se resuelve de fondo la presente acción constitucional.
3. Comunicar de manera inmediata la decisión que se adopte a la Superintendencia de Sociedades y a las autoridades judiciales que actualmente conozcan actuaciones derivadas del trámite concursal.

Atentamente,



OMAR JAVIER ARCINIEGAS VELASQUEZ
C.C. No. 98.379.267 de Pasto
T.P. No. 188.193 del C.S. de la J.
E-mail: firmaxios@gmail.com



TIPO: SALIDA FECHA: 26-03-2026 06:49:29
TRAMITE: 16522 - PETICIONES SECRETARIALES REORGANIZACIÓN
SOCIEDAD: 18129584 - LUIS ALBERTO VELASQUEZ CUARAN
REMITENTE: 620 - INTENDENCIA REGIONAL DE LA ZONA SUR
DESTINO: 800093816 - RAMA JUDICIAL
TIPO DOCUMENTAL: Oficio
CONSECUTIVO: 620-256217
FOLIOS: 2 ANEXOS: SI

Señores,
OFICINA DE REPARTO DE LOS JUZGADOS CIVILES DEL CIRCUITO DE MOCOA

jcctomoc@cendoj.ramajudicial.gov.co
Mocoa - Putumayo

**REF.: ORDEN JUDICIAL
REMISIÓN PROCESO PERSONA NATURAL COMERCIANTE
LUIS ALBERTO VELASQUEZ CUARAN- C.C. 18.129.584**

Respetados señores,

Me permito informarles que, en curso del proceso de reorganización empresarial que adelantaba la persona natural comerciante LUIS ALBERTO VELASQUEZ CUARAN, identificada con C.C. 18129584, por medio de Auto 2026-03-002402 del 11/03/2026, este Despacho resolvió, entre otros, lo siguiente:

"PRIMERO. DECLARAR la terminación del proceso de reorganización de la persona natural comerciante LUIS ALBERTO VELASQUEZ CUARAN, con cédula de ciudadanía No. 18129584 y con domicilio en Mocoa- Putumayo, por las razones expuestas en la parte motiva de este proveído.

SEGUNDO. DECLARAR LA FALTA DE COMPETENCIA de la Superintendencia de Sociedades para dar inicio al proceso de liquidación judicial de la persona natural comerciante LUIS ALBERTO VELASQUEZ CUARAN, de conformidad con lo previsto en el artículo 532 de la Ley 1564 de 2012, reformado por el artículo 4º de la Ley 2445 de 2025, según lo señalado en la parte motiva de este proveído.

TERCERO. ORDENAR a la Secretaría Judicial y Administrativa de la Intendencia Regional de la Zona Sur, remitir a la oficina de REPARTO DE LOS JUZGADOS CIVILES DEL CIRCUITO DE MOCOA, el expediente del proceso de reorganización de la persona natural comerciante LUIS ALBERTO VELASQUEZ CUARAN, con cédula de ciudadanía No. 18129584, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia."

En consecuencia, se remite el expediente del proceso de reorganización empresarial del señor LUIS ALBERTO VELASQUEZ CUARAN, para lo de su competencia, a través del siguiente link:

[Luis Alberto Velasquez Cuaran](#)

CERTIFICACION Y CONSTANCIA DE EJECUTORIA

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.

Page | 1

La presente providencia fue notificada de la siguiente forma: Auto No. 2026-03-002402 del 11 de marzo de 2026 notificado en estados el día 12 de marzo de 2026, quedando legalmente ejecutoriado el día 18 de marzo de la misma anualidad y la misma es fiel copia del original que obra en el expediente, el cual se anexa a este oficio.

Cordialmente,

MARIA ALEJANDRA SANCHEZ RODRIGUEZ

Secretaria Administrativa y Judicial Intendencia Regional de la Zona Sur

TRD: ACTUACIONES

ELABORADOR(ES):

NOMBRE: J0872

CARGO: Contratista

REVISOR(ES) :

NOMBRE: J0872

CARGO: Contratista

APROBADOR(ES) :

NOMBRE: MARIA ALEJANDRA SANCHEZ RODRIGUEZ

CARGO: Secretario Administrativo y Judicial Principal

Santiago de Cali, 15 de enero de 2026

Doctora
JANETH MIREYA GUTIÉRREZ
Intendente Regional Zona Sur
Superintendencia de Sociedades
Calle 10 No. 4-40, piso 2 oficina 201
Edificio Bolsa de Occidente
E.S.D.

Ref.: Expediente No. 108116

Respetada doctora:

LUIS ALBERTO VELÁSQUEZ CUARAN, persona mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía No. 18.129.584 expedida en Mocoa (Putumayo), con domicilio y residencia en la carrera 6 No. 9-664, barrio Miraflores del municipio de Mocoa, correo electrónico: gerenciahjjg@gmail.com, actuando en mi calidad de parte dentro del proceso administrativo de **reorganización de persona natural comerciante** identificado en la referencia, de manera respetuosa me permito exponer los siguientes:

HECHOS

1. Mediante Auto No. 2024-03-004894 del 18 de julio de 2024, la Superintendencia de Sociedades me relevó del cargo de promotor y designó en dicho rol al auxiliar de la justicia **CARLOS HUMBERTO PAVA DE LA SIERRA**, quien quedó encargado de adelantar y cumplir las distintas etapas del proceso de reorganización hasta su culminación.
2. El 25 de julio de 2025, esa Superintendencia profirió auto mediante el cual se reconocieron, calificaron y graduaron los créditos, se asignaron los derechos de voto, se aprobó el inventario y se fijó el término para la presentación del acuerdo de reorganización.
3. En el literal quinto de la parte resolutive de dicha providencia se estableció un **plazo improrrogable de cuatro (4) meses**, contados a partir de su ejecutoria, para la celebración del acuerdo de reorganización, de conformidad con los artículos 30 y 31 de la Ley 1116 de 2006, subrogados por los artículos 37 y 38 de la Ley 1429 de 2010.
4. Hacia finales de octubre y comienzos de noviembre de 2025, intenté en repetidas oportunidades comunicarme telefónicamente con mi apoderado judicial, con el fin de conocer el estado del proceso, sin obtener respuesta alguna. Ante dicha situación, me comuniqué directamente con el promotor **CARLOS HUMBERTO PAVA DE LA SIERRA**, quien me informó que, hasta ese momento, **no se había radicado el escrito de compromiso de reorganización**, situación que me generó profunda preocupación, dado que soy el principal interesado en el adecuado desarrollo y culminación del trámite.

Superintendencia de Sociedades
Superintendencia Regional de la Zona Sur

SEGUIMIENTO

AL CONTESTAR CITE:
2026-03-000238

TIPO: ENTRADA
REMITENTE: 18129584 - LUIS ALBERTO VELASQUEZ CUARAN
FOLIOS: 2

FECHA: 15-01-2026 09:52:07
ANEXOS: NO

5. A mediados de diciembre de 2025, contacté a un abogado en la ciudad de Cali para que verificara personalmente ante la sede de la Superintendencia el estado de mi proceso. Luego de realizar la gestión correspondiente, se me informó que el promotor designado **no presentó dentro del término legal el escrito de compromiso de reorganización**, ni había rendido el informe correspondiente ante la funcionaria ponente del proceso.
6. Como consecuencia de lo anterior, mi proceso actualmente **corre el riesgo de ser remitido a la etapa de liquidación judicial**, debido a la omisión del promotor en el cumplimiento de sus deberes legales, lo cual me ocasionaría graves perjuicios de orden económico, patrimonial y familiar.

SOLICITUD

Con fundamento en los hechos anteriormente expuestos, respetuosamente solicito a usted, doctora Janeth Mireya Gutiérrez, en su calidad de ponente del proceso, que se evalúe mi situación particular y, de ser procedente:

- Se designe un nuevo promotor que continúe con las etapas restantes del proceso de reorganización, y
- Se conceda un nuevo término para la presentación del acuerdo de reorganización.

NOTIFICACIONES

Recibiré notificaciones en la dirección de mi residencia o en el correo electrónico indicados en este escrito.

Agradezco de antemano la atención prestada.

Atentamente,


LUIS ALBERTO VELÁSQUEZ CUARAN
C. de C. No. 18.129.584 de Mocoa (Putumayo).